

-6-
ju

JUEZ PONENTE DR. OCTAVIO GUADALUPE PEÑAFIEL

PRIMERA SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA.- Quito, a 15 de diciembre del 2010, las 09h58.- **VISTOS.-** Actúan los Drs. Rigoberto Ibarra Arboleda mediante Acción de Personal No.- 2690-DP-DPP, del 07 de diciembre por licencia del Dr. Patricio Arizaga; y, Octavio Guadalupe Peñafiel mediante Acción de Personal No.- 2588-DP-DPP, de 29 de noviembre de 2010, por vacaciones del Dr. Jorge Villarroel. Encontrándose integrado, en legal y debida forma, este Tribunal de Alzada, en esta fecha, avoca conocimiento del recurso de apelación interpuesto por el Dr. Carlos Enrique Vélez Rezabala, en contra de la sentencia de acción de protección emitida por el Juez Décimo Primero de lo Civil de Pichincha, el 12 de julio del 2010, a las 09h00, por medio de la cual ha decidido negar la acción de protección presentada por el Dr. Carlos Enrique Vélez Rezabala, quien inconforme con este pronunciamiento ha interpuesto recurso de apelación.- Radicada la competencia en esta Sala Especializada, en razón del trámite y sorteo de ley, según disponen los artículos 86, numeral 3, segundo inciso de la Constitución de la República del Ecuador y 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, publicada en el Registro Oficial No. 52, de 22 de octubre de 2009, se declara su admisibilidad y, encontrándose el proceso en estado de resolver el recurso, previamente a hacerlo se considera: **PRIMERO: Competencia.-** Éste Tribunal de Alzada es competente para conocer y resolver sobre la apelación venida en grado, por así disponer el Art. 166 numeral 2 y 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en concordancia con el Art. 208 del Código Orgánico de la Función Judicial.- **SEGUNDO: Validez procesal.-** Al no evidenciarse omisión de solemnidad sustancial que acarree la nulidad procesal, el proceso es válido y así se lo declara.- **TERCERO: Antecedentes.-** El Dr. Carlos Vélez Rezabala que se desempeñaba como Juez Primero de lo Penal de Portoviejo, amparado en los artículos 88 de la Constitución de la República, en concordancia con el Art. 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ha presentado una acción de protección en contra del Dr. Benjamín Cevallos Solórzano, Presidente del Consejo de la Judicatura, con la pretensión de que en sentencia se declare ilegítimo el acto contenido en la acción de personal No. 322-DNP de fecha 24 de febrero de 2010 y por tal razón se deje sin efecto el relevo de su cargo como juez Primero de Garantías Penales, y por tanto se le restituya a su cargo y funciones que mantenía, así como los haberes que por ley le correspondían desde el momento de la separación ilegítima de sus funciones. Esta demanda ha sido presentada por escrito, el 18 de mayo del 2010, a las 08h44, y una vez practicado el sorteo respectivo, ha correspondido al Juzgado Décimo Primero de lo Civil de Pichincha, Judicatura que ha avocado conocimiento el 1 de junio del 2010, las 17h28 y, de conformidad con el artículo 86 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el numeral 2 del artículo 13 y 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la ha aceptado a trámite, convocando a las partes y al señor Procurador General del Estado a la audiencia pública para el 7 de junio del 2010, a las

08h40; sin embargo, a petición del Director Nacional de Patrocinio y, posteriormente por haberse suspendido la audiencia, el Juez a quo finalmente ha fijado para el 24 de junio del 2010, a las 08h40, llevándose a cabo la referida diligencia a cuya finalización ha dispuesto que en el término de setenta y dos horas el Dr. Hugo Sarabia Rodríguez legitime su intervención a favor del Director de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura y delegado del Señor Presidente del Órgano Administrativo mencionado; además, por acuerdo entre las partes, dentro del término legal notificará con la sentencia correspondiente de conformidad con el inciso tercero del Art. 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Luego del análisis pertinente el Juez ha emitido su sentencia el 12 de julio del 2010, las 09h00, rechazando la acción de protección presentada por el señor Dr. Carlos Enrique Vélez Rezabala, quien inconforme con el pronunciamiento judicial, ha interpuesto recurso de apelación, ante la Corte Provincial de este Distrito y, luego del sorteo de ley ha correspondido su conocimiento a esta Sala, recurso que es motivo del análisis que se desarrolla a continuación. **CUARTO. Alegaciones del Accionante:** En el escrito de demanda, así como en las alegaciones posteriores, el Dr. Carlos Vélez Rezabala, ha expresado los siguientes fundamentos: **1)** Que el acto violatorio de sus derechos constitucionales es el contenido en la acción de personal No. 322-DNP, de fecha 24 de febrero del 2010; **2)** Que en el mes de enero del 2008 ha sido designado por el Consejo de la Judicatura como Juez Primero de lo Penal de Portoviejo, sin que exista acción disciplinaria alguna en su contra, el mes de marzo del 2010 ha solicitado al Dr. Oswaldo Segovia Medina, Director Provincial de Consejo de la Judicatura, siete días de licencia para hacerla uso fuera del país por cuestiones de índole familiar, pedido que fuera aceptado por dicha autoridad mediante acción de personal No. 830 de fecha 10 de marzo del 2010; que cumplida su licencia concedida regresó a su puesto de trabajo, pero con la novedad de que en su despacho se encontraba el doctor Telmo Mora Toro, quien le había dicho que ha sido designado a ese cargo; **3)** Que ante esta situación solicitó se le proporcione el acto motivado por el cual se había tomado esa decisión sin justificación alguna, ante lo cual simplemente se le ha entregado la acción de personal No. 322 -DNP de 24 de febrero del 2010, las misma que impugna a través de esta acción de protección; **4)** Que frente esa situación se ha dirigido al señor Presidente del Consejo de la Judicatura mediante oficio, con el cual solicitó se sirva restituirle al cargo que ostentaba por existir violaciones constitucionales, sin embargo hasta la presente fecha y habiendo concurrido más de 45 días, no ha tenido contestación alguna; **5)** Que por lo expuesto se han violado los siguientes derechos: **a) El principio de legalidad.-** Recogido por la Constitución de la república en su Art. 226, que establece que todo órgano de la Administración Pública, solamente puede hacer lo que la Constitución y la Ley lo determina y, que en el presente caso se puede observar que el actuar del Consejo de la Judicatura, desborda este artículo y hace todo lo contrario de lo que establece tanto la Constitución, como en el Código Orgánico de la Función Judicial, pues contraviene una resolución que tiene como génesis el mismo Consejo de la Judicatura, por tanto la evidencia y el reflejo de esta violación es por demás clara; **b) El Derecho a la**

- 2 -
mde

Seguridad Jurídica.- El momento en que el Consejo de la Judicatura, mediante acción de personal, me releva de mi cargo como Juez Penal, sin que se tome los parámetros constitucionales y legales, hay un rompimiento de esa seguridad jurídica; **c) Derecho al Trabajo.-** De manera ilegítima y de manera arbitraria, se decide quitarme mi única fuente de trabajo, se me esta afectando directamente este derecho, peor aún de la manera como se lo hizo, pues no se esperó siquiera a que me incorpore de mi licencia legalmente concedida, para actuar de esta forma, pues mi reemplazo ya se encontraba ocupando mi lugar como Juez Primero de Garantías Penales; **d) Derecho al Debido Proceso.-** Previo a la resolución se debió realizar una evaluación o analizar un parámetro para tomar la decisión debida respecto a mi relevo, sin embargo de esto simplemente emitió una acción de personal, por lo que no se lo permitió ejercer el derecho a la defensa, contar con la debida publicidad de este procedimiento, y presentar sus debidos argumentos. **e) Derecho a una debida motivación.-** Simplemente llega a mi conocimiento una acción de personal en la que se establece mi relevo Juez Primero de Garantías Penales, en la que no se realiza una correcta vinculación de fundamentos de hecho y de derecho para tomar esta decisión, que cae en la arbitrariedad; **f) Derecho a la Estabilidad Laboral.-** La Constitución de la República, tanto en el segundo inciso del Art. 229, así como el Art. 187, establecen como característica del servicio público en general, así como del servicio judicial, la estabilidad laboral de sus funcionarios. Esta particularidad pretende, como se ha dicho en líneas anteriores, no permitir los abusos de poder, por lo que se exige requisitos para la remoción de un funcionario. En el presente caso, frente a mi ilegal e ilegítimo relevo, no ha existido concurso o motivo legal alguno para que se haya dado dicho actuar, por lo que se ha roto de la manera más infame la estabilidad que el mismo Consejo de la Judicatura, pretende proteger en la resolución No. 33-09, publicada en el Registro Oficial No. 21, de martes 08 de septiembre del 2009.- **Alegaciones del Accionado:** El Dr. Fabián Zurita Godoy, en representación del Presidente del Consejo de la Judicatura, Dr. Benjamín Cevallos, ha expresado lo siguiente: **1)** Que el accionante se desempeñaba en calidad de Juez TEMPORAL Primero de Garantías Penales de Portoviejo, en tal virtud, es competencia del Presidente del Consejo de la Judicatura su remoción conforme lo dispone el Art. 40 del Código Orgánico de la Función Judicial, numeral 2, concordante con esta disposición se encuentra el Art. 269 numeral 5 del mismo Código; **2)** En base a estas disposiciones legales el Presidente del Consejo de la judicatura, mediante acción de personal No. 332-DNP, de 24 de febrero del 2010, NOMBRA PROVISIONALMENTE al Dr. Telmo Humberto Mora Toro, Juez Primero de Garantías Penales de Manabí, en reemplazo del hoy accionante; **3)** El inciso 2 del Art. 178 de la Constitución, consagra las facultades y competencia legales referidas al Consejo de la Judicatura en cuanto guarda relación con el gobierno, la administración, la vigilancia y la disciplina de la Función Judicial, concordante con estas disposiciones constitucionales está el Art. 254 del Código Orgánico de la Función Judicial; **4)** El Art. 173 de la Constitución de la República, en ningún momento señala que estos actos administrativos pueden ser impugnados por la vía Constitucional, concordante con esta disposición está el Art. 31 del Código Orgánico de la

Función Judicial; al respecto el Art. 217 manifiesta quienes deben conocer este tipo de demandas; **5)** En tal virtud el Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, señala el término para demandar; **6)** En aplicación estricta de estas disposiciones legales y constitucionales y de conformidad a lo dispuesto por el numeral 4 del Art. 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es improcedente la acción; **7)** El no observar estas disposiciones constitucionales y legales sería vulnerar lo dispuesto por los artículos 76, 82 y 172 de la Carta Magna que garantiza la seguridad jurídica, el derecho a un debido proceso y el principio de debida diligencia en los procesos de la administración de justicia; **8)** En base a estas disposiciones constitucionales y legales solicito a su Autoridad que en estricto derecho declare nulidad de todo lo actuado y en su lugar dicte el respectivo auto inhibitorio, por cuanto la competencia para conocer de esta clase de impugnaciones de actos administrativos es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.-

Alegaciones de la Procuraduría General del Estado: En la audiencia oral desarrollada en la presente causa el Dr. Néstor Arboleda Terán a nombre del Procurador General del Estado, en lo fundamental ha realizado la siguiente alegación: **1)** Solicito se declare la improcedencia de la presente demanda y ordene su archivo porque el accionante confunde la acción constitucional con la acción judicial; **2)** La petición concreta adolece de algunos errores, como son: el reclamo de pago de valores pendientes una vez que deberá tramitar en juicio contencioso administrativo luego de una sentencia previa según el Art. 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; **3)** El Art. 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, obliga al accionante demuestre, fehacientemente, que se ha violado un derecho constitucional; la mera enunciación de artículos no es suficiente; el accionante está obligado a demostrar cuando, como y donde se violaron sus derechos constitucionales, por una parte y por otra, también se debe demostrar o probar que no existe otro mecanismo judicial adecuado y eficaz para proteger su derecho violado. Para el caso que nos ocupa la vía contencioso administrativa se encuentra expedita; **4)** Por su parte, los numerales 1, 3, 4 y 5 del Art. 42 ibídem de la Constitución, advierten que la acción de protección no es procedente porque no se ha violado derechos consagrados en la Carta Magna, porque lo que se alega en la demanda son aspectos de mera legalidad que deberían ser resueltos por las vías ordinarias judiciales, porque se le está presentando en reemplazo de las acciones ordinarias establecidas en la ley.- **QUINTO: Consideraciones del Juez a quo.-** Al emitir la sentencia, el juez de nivel inferior ha desarrollado su análisis en torno a los siguientes aspectos: **a)** El proceso es válido ya que no se ha omitido ninguna de las solemnidades sustanciales legales y propias del proceso constitucional de protección; **b)** El Art. 88 de la Constitución Política vigente, la acción de protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de los derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; este recurso, constituye una prerrogativa para asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales y se aplica para evitar o remediar un acto o hecho del

Estado, que se produzca en la persona del accionante un daño actual o inminente, grave e irreparable, por lo que para que esta acción proceda, existen premisas que deben establecerse y delimitarse en el acto impugnado, esto es que la actuación de la autoridad sea ilegítima, que se hayan vulnerado derechos constitucionales preestablecidos, y que como consecuencia de dicha actuación ilegítima se hayan producido daños graves o inminentes: **c)** El Art. 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dice: "La acción de protección de derechos no procede, numeral 1. Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos constitucionales. 2. Cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de tales actos se deriven daños susceptibles de reparación. 3. Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o legalidad del acto u omisión, que no conlleven la violación de derechos. 4. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz. 5. Cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho..." **d)** De conformidad con lo previsto por el Art. 83 y más pertinentes de la Constitución de la República actualmente vigente, y el Art. 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, fallar en contra sería desconocer las normas legales antes invocadas, y en mérito a las disposiciones en mención y Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador; **e)** El accionante en su libelo temporal ha manifestado que se desempeñaba, en calidad de Juez Temporal Primero de Garantías Penales de Portoviejo y que fue ilegalmente reemplazado por otro profesional en sus funciones, es necesario manifestar que es competencia del Sr. Presidente del Consejo de la Judicatura su remoción conforme lo dispone el Art. 40 del Código Orgánico de la Función Judicial numeral 2, en concordancia con el Art. 269, numeral 5 del mismo Código Orgánico. En base a estas disposiciones legales, el Sr. Presidente del Consejo de la Judicatura mediante acción de personal No. 322-DPN, de 24 de febrero del 2010, nombra provisionalmente al Dr. Telmo Humberto Mora Toro, Juez Primero de Garantías Penales de Manabí, en reemplazo del hoy accionante, sin haber recurrido a ilegalidades y violaciones a lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador. **SEXTO: Relación de la prueba actuada ante el Juez a quo.-** En razón de que en el presente caso, la impugnación sometida a conocimiento y resolución de esta Sala obedece exclusivamente a la sentencia de acción de protección, corresponde hacer referencia a las siguientes pruebas actuadas ante el Juez a quo: **a)** A fs. 81 y 82 del proceso constan los oficios No. 76-2010-UP-DPCJ-M en que se lee: *"De igual manera, le informo al Dr. Carlos Vélez Rezabala, Juez Primero de Garantías Penales, ya no se encuentra encargado del Despacho, toda vez que fue reemplazado por el Dr. Telmo Humberto Mora Toro, conforme se puede apreciar de los documentos adjuntos"* y Memorando No. 0650-P-CJ-LCN-2010, **Para:** Ing. Marco Polo García Terán, Director Nacional de Personal del Consejo de la Judicatura, encargado; **De:** Dr. Benjamín Cevallos Solórzano Presidente del Consejo de la Judicatura, Asunto: Texto; Fecha: Quito, 24 de febrero del 2010, en el que se lee: *"En relación a su Memorando No.732 de 10 de febrero del año en curso, mediante el cual se informa sobre el perfil del Dr. Humberto Mora Toro,*

para desempeñar el cargo de Juez Penal en el Distrito de Manabí, me permito indicarle que de acuerdo a lo establecido en el Art. 269, numeral 5 en concordancia con el Art. 40 numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, solicito se proceda a emitir el nombramiento provisional a favor del Dr. Telmo Humberto Mora Toro para que desempeñe el cargo de Juez del Juzgado Primero de Garantías Penales de Manabí, y una vez que ha sido aceptada su renuncia al cargo de Juez Temporal de la Ciudad de Quito. Todo esto previa las disponibilidades presupuestarias y las disposiciones reglamentarias pertinentes". **SEPTIMO.- Análisis.-** El artículo 88 de la Constitución de la República, dispone que el objeto de esta acción es el "Amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial..."; la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su Art. 39 dice que se trata de una acción cuyo objeto consiste en el "Amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y Tratados Internacionales sobre derechos humanos que no estén amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, por incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena.", de manera que en razón de su esencia, constituye en definitiva, un mecanismo procesal de corte constitucional, que se caracteriza por ser tutelar, directo, sumario, preferente, inmediato, intercultural, reparatorio y preventivo, según sea el caso. Así, pues, en virtud de la naturaleza de la presente acción, el análisis de la Sala, a más de versar sobre la forma en que se ha dado cumplimiento a los respectivos procedimientos, se centrará en la determinación de la posible vulneración de derechos constitucionales, a fin de satisfacer las exigencias previstas para la emisión de las sentencias de acción de protección, a cuyo efecto tendrá en cuenta la relación de los hechos, los argumentos expuestos por los sujetos procesales, las pruebas actuadas ante el Juez a quo y demás aspectos a ser tomados en cuenta en este tipo de causas. Una vez realizado el estudio general del expediente remitido a objeto de la resolución del recurso de apelación, la Sala estima que se ha dado efectivo cumplimiento a las normas de procedimiento previstas en el artículo 86 de la Constitución de la República y, por tanto, se ha **respetado el debido proceso**, en tanto no ha existido omisión de solemnidad alguna, conforme se ha señalado incluso en el considerando segundo. Con respecto a las partes esenciales de la presente causa, la Sala considera pertinente realizar las siguientes observaciones: **1. Legitimación activa y pasiva:** El accionante, Dr. Carlos Enrique Vélez Rezabala, ha ejercido la legitimación activa, en la forma establecida por el artículo 9, literal a), de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, mientras que la pasiva ha correspondido al Presidente del Consejo de la Judicatura, Dr. Benjamín Cevallos Solórzano, de acuerdo a las normas del Art. 41 de la misma Ley; de igual manera, se ha contado con el Procurador General del Estado. De ahí que, conforme a las normas señaladas y a la esencia jurídica de la acción de protección, se trata de un aspecto que, si bien no es determinante en la decisión de fondo, ha sido debidamente superado; **2. Identificación del acto de la autoridad**

- 9-
nov 2

pública no judicial que habría vulnerado los derechos de la parte accionante.-

Con relación a los antecedentes citados por el accionante para la presentación de la presente acción de protección, del expediente, consta que el acto administrativo violatorio de sus derechos constitucionales por parte de la autoridad pública, es el contenido de la acción de personal No. 322-DNP, de fecha 24 de febrero de 2010, firmada por el Dr. Benjamín Cevallos Solórzano, Presidente del Consejo de la Judicatura y el señor Director General del Personal (E), en la cual se consigna el nombramiento provisional del Dr. Thelmo Humberto Mora Toro, como Juez Primero de Garantías Penales de Manabí; nombramiento que se realiza *"de acuerdo a la facultad conferida en el Art. 269 numeral 5 en concordancia con el Art. 40 numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial"*; por lo que pide se declare ilegítimo el acto contenido en la mencionada acción de personal y se le restituya a su cargo y funciones que tenía. Según el informe del Director Nacional de Personal del Consejo de la Judicatura de fecha 11 de mayo del 2010 (fs. 32 y 33), el accionante ha sido designado Juez Suplente del Juzgado Primero de lo Penal de Manabí, en sesión extraordinaria del Pleno de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo, el 05 de junio del 2008; el 10 de julio del 2008, el Delegado del Consejo de la Judicatura de aquella fecha, ha encargado al Dr. Carlos Vélez Rezabala el Juzgado Primero de lo Penal de Manabí, quien actualmente, en virtud de la resolución impugnada, mantienen su calidad de Juez Temporal dentro del Banco de Elegibles del Distrito de Manabí. De conformidad con el Art. 40 del Código Orgánico de la Función Judicial, las servidoras y servidores de la Función Judicial se clasifican en, titulares: *"Aquellos que han sido nombrados y posesionados para desempeñar un cargo constante en el distributivo de sueldos de la Función Judicial, con duración indefinida o período fijo. (...)";* y temporales: *"Aquellos que han sido designados para prestar servicios provisionales en un puesto vacante; para reemplazar a una servidora o un servidor de la Función Judicial que se halle suspenso en sus funciones mientras no se dicte resolución en firme sobre su situación; para sustituir a una servidora o a un servidor durante el tiempo que estuviere de vacaciones, con licencia o asistiendo a programas de formación o capacitación; en caso de que se hubiere declarado con lugar la excusa o recusación de la jueza o juez; o si se requiera atender necesidades extraordinarias o emergenciales del servicio de justicia."*; por lo que es evidente que el accionante se encontraba prestando servicios en la Función Judicial en calidad de Juez encargado hasta que se nombre a su titular; de conformidad con el Art. 269 numeral 5 al Presidente del Consejo de la Judicatura, entre otras funciones le corresponde: *"Nombrar y remover libremente a las servidoras y a los servidores de la Función Judicial provisionales, sin perjuicio a la atribución de las directoras o los directores provinciales."* De las normas expuestas se evidencia que el Presidente del Consejo de la Judicatura tiene la atribución de remover libremente a juezas o jueces que se encuentran en situación de provisionales, a través del acto administrativo denominado acción de personal, en el cual consta el nombramiento, cargo, fecha y el servidor reemplazado, que no requiere de motivación alguna, ni previamente un procedimiento, sino la simple resolución de la autoridad pública con facultad legal para hacerlo; no así por ejemplo, con los nombramientos de jueces

3

2

3

titulares a tiempo completo o por tiempo fijo que requiere de un concurso de méritos y oposición para cubrir las vacantes de conformidad a normas constitucionales y legales; y, de la existencia de una causa legal para separarlos, siguiendo el debido proceso establecido en las normas legales y reglamentarias para este tipo de procesos. Por lo tanto en el presente caso, no se ha violado el **principio de legalidad**, más aún, para evitar que una función pública como la administración de Justicia se paralice durante el período de transición, el Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, tal como lo prescribe el artículo 178 de la Constitución, ha debido tomar resoluciones que no pueden obedecer al capricho de la autoridad como para que se rompa el principio de legalidad, sino que ha obedecido a la facultad expresada en Ley Orgánica, que está sobre cualquier otra ley o resolución, de conformidad al Art. 425 de la Constitución de la República. **Derecho a la Seguridad jurídica.-** De los alegatos presentados por el accionante, y a la luz de la normativa descrita no se observa que exista justificación o fundamento alguno, para desvirtuar la supuesta afectación a la seguridad jurídica prevista en el artículo 82 de la Constitución de la República; **4.- Derecho al trabajo.-** Estudiados los recaudos procesales, antecedentes y argumentos expuestos en el presente proceso constitucional, se estima que este derecho contemplado en el artículo 33 de la Carta Magna, no ha sido afectado de forma alguna, ya que como se ha observado en los documentos adjuntos al proceso, el accionante ha sido designado Juez encargado, esto es, hasta que el titular se reintegre a sus funciones o que la autoridad competente designe a su titular, según el caso, cumpliendo los requisitos establecidos en las normas constitucionales y legales; **5.- Derecho al debido proceso.-** Para sustentar la violación de este derecho, el accionante ha manifestado que el Consejo de la Judicatura debió haber realizado una evaluación o analizar un parámetro para tomar la decisión debida respecto a su relevo, simplemente emitió una acción de personal; tal alegación no resulta procedente por cuanto no se trataba de un sumario administrativo iniciado en su contra, o de un concurso para jueces titulares en el cual podía participar con pleno derecho, en cuyo caso se debía cumplir con el debido proceso establecido previamente, sino que se trataba de un nombramiento provisional que reemplazaba a quien se encontraba encargado de una Judicatura; **6. Derecho a una debida motivación.-** Como ya se dijo anteriormente, la acción de personal en el presente caso es un procedimiento administrativo para reemplazar a un Juez encargado con otro provisional, por decisión legal de la autoridad, que no requiere de motivación sino de una comunicación y agradecimiento por sus funciones prestadas, que posiblemente no se lo hizo con las formalidades que requiere una buena práctica de relaciones humanas; **7. Derecho a la estabilidad laboral.-** Si bien el artículo 229, segundo inciso de la Constitución de la República establece que los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables, en cualquier función o cargo, al igual que el Art. 187 cuando habla sobre la estabilidad laboral; los servidores públicos judiciales o no, en calidad de encargados permanecen como tales mientras dure su encargo; debido a la situación profesional, personal o familiar de los servidores judiciales, pueden ser separados o ausentarse temporalmente de

sus puestos de trabajo, circunstancias justificadas contempladas en la ley, por lo que la autoridad debe actuar inmediatamente y reemplazarlos provisionalmente o temporalmente a fin de evitar que se interrumpa la administración de justicia, por lo tanto, la Sala tampoco observa que se haya violado la estabilidad laboral de un Juez encargado de una Judicatura, en los términos establecidos en la Constitución de la República. En base a todo lo expuesto, la Sala considera que no se han violado los **derechos constitucionales** alegados por el accionante y por ende, no se ha generado **daño material e inmaterial alguno en perjuicio del accionante**. El artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece entre los requisitos para poder presentar la acción Constitucional ordinaria de protección, que exista la "violación de un derecho constitucional", el artículo 41 de la misma Ley prescribe que esta acción es procedente contra "todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya violado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio"; y, así mismo el Art. 42 ibídem establece que la acción no procede "cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos constitucionales". Y siendo el objeto fundamental de la acción de protección el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, al no evidenciarse tales violaciones, no procede la acción de protección. En conclusión, la Sala considera que se ha hecho una invocación inapropiada de la acción de protección, de ahí que, al no cumplir con el presupuesto fundamental exigido por el artículo 88 de la Constitución de la República que es la violación de derechos constitucionales, **Administrando justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, se confirma la sentencia recurrida y se niega el recurso de apelación** propuesto por el Dr. Carlos Vélez Rezabala. Con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 76, 82 y 172 inciso segundo de la Constitución de la República, que garantiza el derecho al debido proceso, la seguridad Jurídica y el principio a la debida diligencia, en los procesos de administración de justicia; se dispone que el señor Secretario Relator de la Sala, una vez ejecutoriada esta sentencia, remita una copia certificada de la misma a la Corte Constitucional, conforme a lo dispuesto en el Art. 86 numeral 5 ibídem y remita inmediatamente el expediente al Juzgado de origen.- **Notifíquese.**

Dr. Marco Maldonado Castro
JUEZ PROVINCIAL

Dr. Rigoberto Ibarra Arboleda
JUEZ PROVINCIAL (E)

Dr. Octavio Guadalupe Peñafiel
JUEZ PROVINCIAL (E)

